

ÍNDICE AI: AFR 62/34/98/s
2 DE SEPTIEMBRE DE 1998

EMBARGADO HASTA LAS 00:01 HORAS DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1998

República Democrática del Congo: El conflicto armado, agravado por el historial de abusos contra los derechos humanos e impunidad

Las poblaciones de la República Democrática del Congo y los países vecinos serán víctimas de una nueva catástrofe a menos que se tomen inmediatamente medidas concretas para proteger los derechos humanos, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

En un informe titulado *DRC: A long-standing crisis spinning out of control* (AFR 62/33/98), la organización acusa a todos los bandos del actual conflicto armado de la República Democrática del Congo de perpetrar o no impedir que se perpetren atrocidades contra los derechos humanos, y pide a todos los gobiernos y los grupos armados que participan en el conflicto que den instrucciones precisas a sus combatientes para que respeten los derechos humanos y se atengan a las normas fundamentales del derecho de los conflictos armados protegiendo a los civiles desarmados.

Amnistía Internacional ha afirmado: «La comunidad internacional no ha adoptado una postura firme contra los perpetradores ni se ha puesto del lado de las víctimas. Son estas violaciones no resueltas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario las que están en el meollo del actual conflicto».

La organización también ha pedido a los gobiernos de la región y a otros que detengan inmediatamente todo el suministro de material militar y las transferencias de personal militar que puedan contribuir a nuevos abusos.

«Dadas las atrocidades que han cometido en los últimos tiempos algunas de las fuerzas que se oponen y que apoyan a Kabila, así como el reciente genocidio de los tutsis en Ruanda y las matanzas de hutus y de integrantes de otras etnias en la República Democrática del Congo y en Ruanda, cualquier nueva transferencia de material, personal o entrenamiento militar podría provocar un aumento de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la República Democrática del Congo y países vecinos.»

Desde el 2 de agosto, centenares de tutsis y de habitantes de la República Democrática del Congo con vínculos presuntos o reales con tutsis o con Ruanda han sido detenidos arbitrariamente en la capital, Kinshasa, y hay informes de que algunos han sido ejecutados extrajudicialmente.

Tanto las altas autoridades de la República Democrática del Congo como los medios de comunicación nacionales han emprendido una campaña de odio contra los tutsis y las personas de origen ruandés que recuerda a la que condujo al genocidio de 1994 en Ruanda. Las autoridades han incitado a los civiles a atacar a los tutsis y a otros sospechosos de pertenecer a la oposición armada. Según los informes, muchas de estas personas han sido quemadas vivas por civiles, mientras que otras han sido ejecutadas sumariamente por tropas gubernamentales en Kinshasa, especialmente en los distritos de Masina, Kingasani y Kimbaseke.

También hay informes según los cuales los combatientes armados de la oposición, así como las fuerzas gubernamentales de Ruanda y Burundi desplegadas en el este de la República Democrática del Congo han matado a cientos de civiles desarmados sospechosos de apoyar al gobierno. Por ejemplo, el 24 de agosto, más de 280 civiles desarmados, entre ellos varios sacerdotes y monjas católicas, murieron a

manos de combatientes armados de la oposición y de las tropas gubernamentales ruandesas en la parroquia católica de Kasika (provincia de Kivu Sur) y en sus alrededores. Asimismo hay informes del secuestro de muchos civiles por miembros de la oposición armada.

En 1996 y 1997, gran parte de la comunidad internacional guardó silencio sobre el hecho de que los combatientes partidarios del presidente Laurent-Désiré Kabila y los miembros de las fuerzas gubernamentales ruandesas, ahora enfrentados, mataron a decenas de miles de refugiados ruandeses y ciudadanos congoleños desarmados en la República Democrática del Congo.

En la comunidad internacional, algunos restaron importancia a los homicidios o hicieron como si nunca hubieran sucedido. Ni siquiera el Consejo de Seguridad de la ONU actuó eficazmente en julio de 1998 cuando recibió un informe del equipo de investigación del Secretario General que indicaba claramente que esas fuerzas habían cometido crímenes contra la humanidad, algunos de los cuales podrían constituir genocidio. Los autores de estos crímenes —que aún no han comparecido ante la justicia— están ahora en diferentes bandos, pero van camino de repetir las mismas atrocidades.

Angola, Zimbabue y Namibia ayudan militar y políticamente a las fuerzas leales al presidente Kabila, mientras que Ruanda, Uganda y Burundi apoyan a la oposición armada. Hasta hace poco, los seis gobiernos apoyaron al presidente Kabila, antes y después de su subida al poder en 1997. La participación internacional en el conflicto amenaza con aumentar.

Así las cosas, Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que dejen de suministrar armas y e impidan otros tipos de transferencias militares, de seguridad y policiales que puedan ser utilizadas para perpetrar abusos en la República Democrática del Congo a todos los bandos del conflicto hasta que se tomen medidas eficaces y se pongan en marcha mecanismos adecuados para vigilar y garantizar que las transferencias no contribuyen a los abusos contra los derechos humanos.

El 31 de agosto de 1998, el Consejo de Seguridad de la ONU se unió al creciente número de organizaciones y diversos organismos que piden una solución pacífica al conflicto, e instó a todos los bandos a respetar el derecho humanitario y en concreto los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. Amnistía Internacional pide a los Estados miembros de la ONU, a la Organización de la Unidad Africana (OUA), a la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral y al Movimiento de Países No Alineados, que se ocuparán de la crisis de la República Democrática del Congo en próximos días, que condenen públicamente todos los abusos contra los derechos humanos que se cometen en la República Democrática del Congo y exijan que se ponga fin a ellos, independientemente de quiénes sean los perpetradores y las víctimas.

«Cualquier iniciativa de paz que presente la comunidad internacional debe incluir mecanismos concretos para impedir violaciones de derechos humanos y garantías de que todos los responsables de abusos contra los derechos humanos en el marco del conflicto armado en la República Democrática del Congo comparecerán ante los tribunales», ha manifestado Amnistía Internacional.

«Los bandos del conflicto deben permitir a los miembros de las organizaciones de derechos humanos y a otros observadores de derechos humanos independientes que trabajan en la República Democrática del Congo investigar e informar sobre las denuncias de abusos contra los derechos humanos en las zonas bajo su control, y garantizar que los investigadores pueden acceder sin trabas y con seguridad a todas estas zonas.»